

Patricia Madariaga Villegas*

Cultivo de coca, jóvenes y autoridades armadas en las montañas del sur de Colombia

El tema de los cultivos ilícitos –fundamentalmente de coca, y en menor medida de amapola- ha sido uno de los más importantes en la historia colombiana de las últimas décadas. Las implicaciones sociales, económicas y legales del fenómeno han sido estudiadas desde diversas disciplinas en la medida en que éste se entrecruza con las redes políticas, transforma la sociedad y alimenta la guerra. La relevancia del problema supera entonces el contexto académico y se convierte en un tema importante para los imaginarios sociales y las políticas públicas, donde la representación que se hace de los actores que toman parte en la producción y tráfico de drogas ilícitas tiene consecuencias no sólo conceptuales, sino también políticas y militares.

Este artículo presenta la caracterización de una comunidad cultivadora de coca en las montañas del departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, y la contrapone a aquello que la literatura especializada ha dado por cierto respecto de quiénes son y cómo operan las personas involucradas en la producción de estupefacientes. Se basa en los hallazgos realizados a lo largo de varios meses de trabajo etnográfico y se alimenta de la literatura que sobre el tema se ha producido en Colombia en las décadas recientes.

El análisis privilegia cuatro ejes: las condiciones sociales y económicas asociadas al cultivo de coca, la participación de los jóvenes en este proceso, el papel de los actores armados y la relación que los cultivadores establecen con las diversas instancias del Estado.

La relevancia de una aproximación como la descrita tiene que ver con que, en su mayoría, los estudios sobre los contextos sociales en que se cultiva coca en Colombia se han concentrado en las áreas de grandes plantaciones, donde el flujo de dinero, la alta cantidad de población flotante y las formas de dominio armado generan situaciones particulares en términos culturales y de conflicto. La imagen predominante en los medios muestra a los propietarios de estos grandes cultivos como criminales poderosos insertados en las redes del narcotráfico, que cuentan con avanzados recursos para el cultivo, el procesamiento y el tráfico de las sustancias y a cuyo servicio operan brigadas de 'raspachines'¹ manipulados por la guerrilla y enloquecidos por el dinero fácil.

El argumento de este artículo es que, si bien pueden identificarse regiones del país en que la realidad corresponde de manera relativamente precisa a esa imagen, en muchas otras zonas la cotidianidad del cultivo muestra dinámicas muy distintas. Para finales de los años noventa, se estimaba que “del total de los cultivos de coca, el 60% estaba sembrado en pequeñas parcelas de menos de dos hectáreas y era manejado por campesinos e indígenas con fines de subsistencia. El 40% de coca restante fue identificado como cultivos

* Antropóloga y Magister en Antropología Social, investigadora en temas de violencia política y movimientos sociales.

¹ Con este término se conoce a los jornaleros -por lo general varones jóvenes- que se dedican a recolectar la coca para su procesamiento, 'raspando' los tallos para desprender las hojas.

industriales, de propiedad de narcotraficantes y cuyo fin era la comercialización a gran escala” (Díaz y Sánchez, 2004: 11). Ello significa que, si las proporciones no han cambiado demasiado en la última década, más de la mitad de los cultivos de coca en Colombia no corresponden al modelo que generalmente se ha presentado como propio de las ‘zonas cocaleras’, sino a comunidades campesinas e indígenas que tienen en la coca su principal fuente de ingresos, pero cuya relación con los cultivos ilícitos y con el Estado es mucho más compleja de lo que correspondería a la representación que se ha hecho de ellos.

Explorar la complejidad de esa relación y sus implicaciones es entonces una apuesta por reconocer la diversidad sociocultural, política y económica presente en las dinámicas del cultivo de coca en el país y superar la mirada simplificadora que encuentra en la criminalización de los cultivadores (en particular los adolescentes) la respuesta a los interrogantes planteados por el fenómeno de los cultivos ilícitos y sus consecuencias para la sociedad colombiana.

Orígenes y dinámicas del cultivo de coca en Colombia

Desde épocas precolombinas, la coca fue cultivada en Sur América por varios grupos étnicos que mezclaban la hoja con cal para utilizarla como estimulante en rituales religiosos y en la vida diaria. Considerada sagrada por numerosos pueblos a lo largo de los Andes, la coca ocupaba un lugar central en su cosmología y hacía presencia en diversas ceremonias (Vidart, 1991).

Tras la conquista, la coca llegó a Europa², y a partir de 1860 comenzó a ser sintetizada para producir diversos extractos y elixires de uso medicinal y posteriormente recreativo, dando lugar finalmente a la aparición de la cocaína en polvo (Madge, 2001). Su uso creció significativamente en las décadas siguientes, y para comienzos del siglo XX se había establecido una demanda por parte de los países industrializados (entre ellos los Estados Unidos de América) que transformó la coca en un cultivo comercial en los países andinos orientado fundamentalmente a la exportación.

Las primeras leyes antidrogas norteamericanas, promovidas en 1907, llevaron a que la producción y comercio de estupefacientes se convirtiera en crimen, a la vez que su ilegalidad lo convirtió en un negocio mucho más rentable (Madge, 2001). El fenómeno del narcotráfico propiamente dicho surge entonces de la prohibición, que cambiaría definitivamente el rumbo del cultivo, procesamiento, transporte y consumo de alcaloides.

Si bien Colombia no estaba originalmente entre los países con mayor presencia de coca – Perú y Bolivia tenían una mayor tradición de cultivo con fines de consumo interno de la numerosa población indígena-, en la década de los setenta los colombianos “se introdujeron en el tráfico de drogas con ayuda de una serie de veteranos estadounidenses de la guerra del Vietnam. [...] Pequeñas aeronaves, y otras no tanto, se unieron a la flota de lanchas rápidas que hacían el trayecto hacia Miami para las entregas, cada vez mayores” (Madge, 2001).

2 Si bien es probable que los conquistadores españoles hubieran llevado consigo algo de coca en sus viajes de regreso, su presencia 'oficial' en Europa data de la década de 1630, cuando colonos holandeses en Brasil enviaron la planta al jardín botánico de la Universidad de Leiden (Madge, 2001).

En esta misma década, y tras haberse insertado en el circuito del narcotráfico básicamente como lugar de procesamiento y embarque de la coca producida en Bolivia y Perú hacia Norteamérica y Europa, Colombia empezó a posicionarse como país cultivador, con un crecimiento exponencial en la superficie sembrada que le llevó a contar con 80 mil hectáreas de coca en 1995, más del doble de las que existían cinco años antes. El aumento continuó hasta alcanzar las 150 mil hectáreas para el año 2000, lo cual se combinó con disminuciones substanciales en las áreas cultivadas en Perú y Bolivia para poner a Colombia como principal país productor de coca en el mundo (Thoumi, 2002). A partir del año 2002, no obstante, se ha registrado un leve descenso en las áreas cultivadas, debido probablemente a la combinación de programas de erradicación forzada y de desarrollo alternativo (Tabares y Rosales, 2005).

De las zonas sembradas, como se ha señalado, aproximadamente el 60% corresponde a cultivos campesinos de pequeña extensión. Esta distinción, establecida sistemáticamente en la literatura, no tiene sin embargo un correlato en las políticas públicas. “El Consejo Nacional de Estupefacientes diferencia entre grandes (más de diez hectáreas), medianos (tres a diez hectáreas) y pequeños cultivadores (menos de tres hectáreas), pero la acción del Estado criminaliza al pequeño cultivador puesto que la ley (30 de 1986) no prevé un tratamiento diferencial, y la fumigación aérea difícilmente puede ser selectiva” (Gómez Buendía, 2003: 311).

Diversos analistas han señalado que Colombia era un lugar propicio para el establecimiento y consolidación de la producción de narcóticos debido a la falta de presencia estatal, al sistema político clientelista, a una sociedad extremadamente violenta y una cultura de exportación ilegal de productos (Thoumi, 1994). Se ha señalado también a la pobreza y la desigualdad como determinantes del crecimiento de la economía ilegal, pese a que en términos estadísticos no parece existir una correlación entre pobreza campesina y cultivos ilícitos (Thoumi, 2002).

Otras hipótesis sostienen que las crisis económicas regionales en la década de los ochenta en Colombia, que golpearon productos tradicionales como el algodón, los textiles, el azúcar y las esmeraldas, entre otros, impulsaron el desarrollo de la coca. A ello se suman los efectos de la crisis de rentabilidad y competitividad, las dificultades de financiamiento y acumulación de capital, los limitantes para acceder a procesos tecnológicos avanzados y una precaria infraestructura de comercialización (Betancourt y García, 1994). Este tipo de explicaciones, si bien distan de explicar el fenómeno en su totalidad, pueden arrojar luces sobre los factores que hicieron de la coca una opción económica para muchos colombianos en esa época.

Los cultivos iniciales fueron establecidos en zonas aisladas de los principales centros económicos del país, tales como los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo, aunque la operación a gran escala del narcotráfico aumentó sustancialmente las ganancias y propició la formación de los llamados 'carteles' de Medellín, Cali y la Costa, regiones desde donde se controlaban las ganancias que se producían en las áreas rurales. Fundamentalmente, “los cultivos de hoja de coca en Colombia se han implantado en zonas de colonización campesina aisladas, de reserva forestal, de amortiguación (parques

naturales) y zonas de resguardos indígenas caracterizadas por poseer suelos pobres para la agricultura y la ganadería con precarias condiciones sociales y de infraestructura, en los cuales la protección de los actores armados ha jugado un papel determinante. En estas zonas generalmente confluyen conflictos sociales (marginalidad y pobreza), políticos (conflicto armado) y económicos (crisis en los mercados agrícolas).” (Díaz y Sánchez, 2004: 14).

La distribución espacial de los cultivos de coca en la geografía colombiana, entonces, dista de ser casual. El desarrollo de variedades de la planta que pueden adaptarse a los más diversos climas, suelos y altitudes, sin embargo, ha llevado a su dispersión en zonas de montaña, de sabana y de selva, entre las cuales tienen ventaja aquellas cuya ubicación permite el fácil transporte del producto a centros de distribución o directamente a otros países.

Sin embargo, aún en las zonas de mayor afluencia de dinero la riqueza producida por los cultivos ilícitos se distribuye desigualmente, dejando a quienes se encuentran en la base de la pirámide (entre ellos los pequeños cultivadores y ‘raspachines’) una mínima fracción del costo final del producto. En esta actividad, como en otras del campo, las grandes ganancias se dan en la intermediación y no en la producción, y gran parte de ellas se genera fuera del país (González, 2001). Ello lleva a que en las regiones cocaleras “el mejoramiento de la calidad de vida, en términos generales y de desarrollo regional esperado, no se da” (Ferro et al., 1999: 96).

El cultivo de coca es además altamente exigente en tiempo y en recursos, pues los cocales deben desyerbarse, abonarse y fumigarse periódicamente para asegurar su productividad. Según Sabogal (1998: 35) “Si el campesino está al frente de la producción de tres hectáreas de coca, en promedio dedica 20 días continuos exclusivamente a la faena de recolectar, procesar, controlar malezas y plagas y fertilizar, cada vez que hay cosecha de hojas”.

A ello se suman las limitaciones impuestas por la ilegalidad del cultivo, la posesión y el transporte de coca y sus derivados³. La ley dispone penas de prisión, confiscación y destrucción de insumos y estupefacientes⁴, y las fumigaciones con glifosato y otros químicos dañinos para las plantas de coca (y también para cultivos de pancoger, animales y personas) han aumentado su frecuencia en la pasada década. Aún así, y “a pesar de la política altamente represiva, no solamente la producción no se ha detenido, sino que ha aumentado” (Tocora, 2001: 50).

Uno de los principales motivos de dicha persistencia es que, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de los productos agrícolas, la comercialización de la hoja o la pasta de coca está siempre asegurada. Hay una demanda internacional creciente para el producto y sus derivados, y toda una cadena de intermediación que llega directamente hasta los productores (González, 2001). Adicionalmente, la transformación de la coca en pasta base dentro de la finca y con mínimos recursos hace posible que los productores agreguen valor

³ No obstante, es necesario recordar que es esta misma ilegalidad la que hace posible el narcotráfico como sistema económico y su correlato de violencia.

⁴ Véase la Ley 30 de 1986, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”, y particularmente el Capítulo V, “de los delitos”.

al producto que sacan para la venta. La producción es relativamente continua y el producto es no perecedero, ocupa poco espacio y pesa poco, lo que facilita su transporte y comercialización.

También hay quien señala entre los obstáculos para la eliminación de los cultivos ilícitos que los campesinos “tienen instituciones comunitarias débiles, y están armados.” (Thoumi, 2002: 113). Del mismo modo, se ha dicho que la ausencia del Estado en las zonas apartadas impide que éste tenga allí alguna legitimidad, y “su condición premoderna tampoco le permitió construir referentes culturales afirmativos que contribuyesen a interiorizar mecanismos de contención de los impulsos, incluyendo los violentos, o pautas más sutiles y modernas de censura y control” (Vargas, 2001: 238).

Tenemos entonces unos cocaleros a quienes con frecuencia se representa como violentos, desorganizados, e incapaces de controlar sus impulsos. Se asume que su codicia les lleva a dedicarse a una actividad ilegal (y, desde ciertas miradas, inmoral) para obtener ganancias rápidas y de alguna manera inmerecidas. De hecho,

“Es ya un lugar común suponer que el cultivo, procesamiento y comercio de la coca generan violencia, promueven el individualismo, la búsqueda de dinero fácil -narcamentalidad- y la pérdida de valores. Desde esta perspectiva se hace una lectura homogeneizante de los efectos de la economía de la coca en los pobladores de las regiones productoras, quienes no sólo son descritos como gente sin arraigo, sino también como personas violentas que actúan fuera de la ley e imponen sus propias reglas de juego” (Ramírez, 2001: 260).

Ello se acentúa por el hecho de que en los cultivos industriales se acostumbra contratar números significativos de trabajadores (por lo general adolescentes) que se encargan de la recolección de la hoja de coca. “Estos son los llamados popularmente ‘raspachines’ y son quienes han hecho de este trabajo una profesión” (Ferro et al., 1999: 26-27).

La presencia de estos grandes grupos de jóvenes –muchas veces alejados de sus familias y comunidades de origen- trae consigo una serie de ofertas de productos y servicios de alimentación, vestido, transporte y entretenimiento, entre otros. Ello se potencia por el hecho de que los salarios que se les pagan son substancialmente mayores que el promedio por trabajo agrícola en la región y en el resto del país, confiriéndoles un poder adquisitivo notorio. Aún así, investigadores de este fenómeno señalan que “la consabida crítica hacia estos jóvenes sobre su deseo de obtener ‘dinero fácil’ no deja de ser una afirmación sin mayor justificación. [...] No tienen estabilidad laboral ni seguridad social. Trabajan en condiciones difíciles pues soportan el rigor del sol y la lluvia propio de la región amazónica. Sus manos se manchan y deterioran por el raspado de la hoja de coca” (Ferro et al., 1999: 159).

El conflicto armado, las guerrillas y su relación con los cultivos ilícitos

El conflicto armado colombiano ha sido caracterizado como uno de los más antiguos y complejos del hemisferio, debido al entrecruzamiento de factores sociales, políticos, económicos y culturales que no permiten encasillarlo en las categorías tradicionales de

guerra civil, conflicto étnico, confrontación religiosa o simple repercusión violenta de una economía ilegal. Con sus orígenes más directos en el enfrentamiento entre los partidos Liberal y Conservador en los años cincuenta (época que suele ser llamada “La Violencia”, con mayúsculas, por la sociedad y la academia en Colombia), el conflicto se ha alimentado de las condiciones sociales de inequidad y pobreza, se ha agudizado con influencias del ámbito internacional, se ha financiado con la economía ilícita y se ha compenetrado con el sistema político institucional.

Su impacto diferencial – en lo urbano y lo rural, por ejemplo – ha dificultado una comprensión unificada de la miríada de dinámicas que lo componen, a la vez que alimenta percepciones de muy diversa índole sobre sus causas, consecuencias y posible resolución entre los varios sectores de la sociedad colombiana. La interacción entre las fuerzas armadas estatales, los grupos guerrilleros (principalmente las Farc y el ELN) y, en décadas recientes, el paramilitarismo, se ha ido transformando en la medida en que la geopolítica de la guerra, las estrategias bélicas y las respuestas sociales cambian, a la vez que se ven moduladas por la dinámica del conflicto en el largo plazo.

Si bien la dinámica política reciente, influida por la política de 'Seguridad Democrática' promovida por el gobierno de Álvaro Uribe ha atenuado algunos de los efectos más visibles del conflicto, en especial para las élites y los pobladores urbanos, la guerra está lejos de terminar. Hubo un descenso importante de los niveles de acciones bélicas entre el 2002 y el 2005, con un repunte en el 2006 y el 2007, pero las cifras se mantienen en “un nivel que es equiparable al que presentó la confrontación armada durante gran parte de los noventa” (García, 1998: 1).

Entre enero y diciembre de 2008 el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep registró 1849 casos de violación a los derechos humanos relacionados con el conflicto, de los cuales 291 tuvieron lugar en el Cauca (Cinep 2009: 63). El uso de armas prohibidas por el DIH también se encuentra lejos de disminuir, y de hecho los incidentes con minas antipersonales aumentaron un 120% entre 2007 y 2008 (Angulo et al., 2009).

Gran parte de estos episodios se atribuyen a los grupos guerrilleros que han jugado un papel fundamental en el desarrollo del conflicto desde sus inicios a finales de la década de los cuarenta, cuando se organizaron las primeras autodefensas campesinas liberales y comunistas como respuesta a la violencia promovida por el régimen conservador (Vélez 2001: 2).

Actualmente, en numerosos espacios locales y regionales en Colombia “la guerrilla tiene un poder sustentado, basado en apoyos políticos locales o en la capacidad de presión que su fuerza coercitiva genera en muchos pobladores y en sus autoridades. Dicho poder se expresa en la 'auditoría armada' que ejercen sobre las administraciones municipales; en la regulación (probablemente con alta dosis de autoritarismo) de conflictos entre particulares; en la aplicación de un sistema ilegal de 'impuestos'” (Vargas, 2006: 246).

Por su tamaño, trayectoria, incidencia en la vida nacional y presencia en la zona de este estudio, podemos destacar dos de ellos: las Farc y el ELN, cuyo crecimiento ha sido

exponencial en las décadas recientes.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacen oficialmente en 1966, fruto del encuentro entre la guerrilla campesina que no logró desmovilizar el Frente Nacional y el Partido Comunista, que no encontraba espacio en el 'centro' del sistema político colombiano (Gómez Buendía, 2003: 28).

Debido a su origen campesino y su propuesta de carácter agrarista, las Farc se desarrollaron fundamentalmente en las áreas rurales. Se ha señalado una coincidencia original entre la situación de pobreza de una región, la ausencia del Estado y la presencia guerrillera. “Las Farc preferían ocupar entonces, regiones de colonización distantes de Centros Administrativos importantes, donde existían conflictos agrarios no resueltos y vacíos institucionales” (Vélez, 2001: 2).

A lo largo de su trayectoria, las Farc pasarían de una mirada agrarista radical a una perspectiva marxista-leninista, con un componente de 'bolivarianismo' que se acentuaría tras la caída de la Unión Soviética. Estos momentos, sin embargo, distan de ser sucesivos y excluyentes. El balance de posiciones ideológicas ha sido complejo, y no está desconectado de las necesidades internas del movimiento, impuestas por su dinámica geopolítica y su situación militar. Como señalan González, Bolívar y Vásquez (2003: 51-52),

El caso de las Farc “combina la antigua violencia, expresada en sus raíces campesinas, su carácter telúrico y la insistencia en el problema agrario, con la violencia moderna, con su capacidad de inserción en las regiones de frontera agrícola abierta, y en menor medida en las fronteras agrícolas cerradas, a través del control y establecimiento de funciones protoestatales en los procesos de colonización, y con la violencia posmoderna, por su inserción en la globalización a través de las funciones de regulación y control social y político en gran parte de las regiones de cultivos y producción de coca y amapola”.

Esta última modalidad de intervención se acentuó a partir de la Séptima Conferencia, celebrada en 1982, cuando a la sigla tradicional Farc se le añadió un significativo EP (Ejército del Pueblo), se aceleró el proceso de reclutamiento y se inició la política del desdoblamiento de los frentes guerrilleros, con la intención de copar todos los departamentos del país (Pizarro, 2004: 87). A partir de entonces, las Farc se establecerían con una propuesta de control territorial a través de una estructura militar que se aleja de la lógica de guerra de guerrillas para establecerse como ejército.

Ello tuvo como consecuencia el rápido crecimiento de las filas de la organización (en parte debido al reclutamiento forzado) y el copamiento de nuevos territorios. Las Farc pasaron de sus 48 miembros iniciales en los años cincuenta a tener 8 mil a finales de los 80 y unos 16.500 combatientes efectivos, distribuidos en 62 frentes y siete bloques, en el año 2003 (Gómez Buendía, 2003). La presencia armada de las Farc aumentó entonces sin que lo hiciera proporcionalmente su trabajo político, dando lugar a dinámicas fragmentadas de control bélico por parte de combatientes que frecuentemente respondían a lógicas más pragmáticas que ideológicas, cuyas acciones profundizarían la paradoja de la defensa guerrillera de la defensa del campesinado, consistente en dotar a las supuestas bases sociales de una serie de reivindicaciones y someterlas a una violencia sistemática que

pretende supuestamente su empoderamiento (González, Bolívar y Vásquez, 2003).

Un segundo actor armado crucial en el escenario de este estudio es el Ejército de Liberación Nacional, que surgió el 4 de julio de 1964 en Simacota, departamento de Santander. De acuerdo con uno de sus fundadores y primeros líderes, Fabio Vásquez Castaño, el grupo “Nace de la necesidad del campesinado de resolver sus problemas. La situación de miseria, de hambre, de enfermedades, de analfabetismo y de represión sufridas principalmente por nuestro campesinado. [...] Los campesinos están cansados de promesas, saturados de engaños [...] No hay otra salida: están dispuestos a respaldar la lucha armada” (Citado en Vargas, 2006: 137).

Se trata, señala Vargas (2006) de una violencia que se autojustifica con demandas radicales de transformación social y con pretensiones nacionalistas, orientándose a la construcción de un actor político-militar que enfrentara al Estado y eventualmente lograra sustituirlo. Existen, según este autor, tres dinámicas fundamentales que se entrecruzan en el surgimiento de este grupo guerrillero: la generada por los impulsos externos, particularmente la revolución cubana; la de los núcleos campesinos remanentes de las guerrillas liberales que jugaron un papel protagónico en confrontación partidista de los años cuarenta y cincuenta; y el protagonismo político nacional de que gozó el movimiento estudiantil universitario colombiano en la década de los setenta.

Tras un inicio marcado por el caudillismo, el ELN asume en los años noventa una estructura que hace mucho más lento y complejo el proceso de toma de decisiones y permite la coexistencia de numerosas tendencias dentro del movimiento, lo que puede resultar, como en el caso que nos ocupa, en frentes o escuadras cuyo accionar no parece responder a los criterios establecidos en el discurso oficial de la organización. De hecho, el ELN duplicó su pie de fuerza entre 1991 y 2001, cuando alcanzó 4.500 combatientes, distribuidos en 41 frentes y cinco bloques” (Gómez Buendía, 2003: 83).

Esto puede responder, por otra parte, a un proceso que Vargas (2006) identifica como una elección que diferencia al ELN de las Farc, su principal competidor: la decisión de privilegiar los procesos de territorialización en lo regional frente a la posibilidad de constituir un ejército de carácter nacional. EL ELN pasa entonces de priorizar una hipotética toma del poder nacional a enfatizar el control y el ejercicio del poder en lo regional y lo local. La búsqueda de nichos sociales de apoyo se realiza a través de frentes que operan como estructuras político-militares de base responsables de adelantar trabajo político en la región a través de estructuras menores y de definir las perspectivas de acción militar en la misma.

No hay que olvidar, por lo demás, que la dirigencia del ELN se encuentra embarcada desde hace más de una década, en un proceso de diálogo intermitente con los sucesivos gobiernos que incluye “bajarle progresivamente el nivel y la intensidad a la confrontación militar mientras se consolida una ruta más precisa de reformas de mediano y largo plazo, dentro de las cuales se pueda repensar el rol futuro de esta organización” (Vargas, 2006: 222).

Ello se ha manifestado en la ausencia de acciones militares de gran escala por parte del ELN en los años recientes y en el protagonismo de sus líderes en la búsqueda de diálogos

de paz, lo que permite a esta guerrilla aparecer como una fuerza más política que militar ante la sociedad colombiana, contrapuesta a la estrategia ofensiva de las Farc. Tanto en lo nacional como en lo local, para el caso de Colibrí, el ELN se presenta como alternativa a las Farc, a la vez que se esfuerza por mantener los recursos necesarios para una negociación no tan desigual, representado particularmente en los secuestrados de alto valor político en lo nacional y el control del tráfico de coca en lo local.

Interacciones entre coca y conflicto

En las décadas recientes, el impacto de los cultivos ilícitos en la sociedad, la economía y la política colombiana ha alcanzado todas las esferas, entre ellas la de la guerra. Como señalan varios autores, “las drogas ilegales se han convertido en centro de gravedad del conflicto colombiano. Con el narcotráfico se catapultó la capacidad militar de los grupos armados, se acentuó su lógica rentista, se criminalizaron sus acciones, se erosionó la legitimidad del sistema político y se internacionalizó la confrontación” (Gómez Buendía, 2003: 305). En términos generales, los grupos armados ilegales participan en el negocio de las drogas en todas sus etapas: vigilando cultivos, mediando en las relaciones patronales de los mismos, actuando como intermediarios locales, y sobre todo cobrando el impuesto de 'gramaje', un porcentaje del valor de la coca comercializada cuya proporción varía según la zona y el actor y que puede ser cobrado en dinero o en 'mercancía' (Gómez Buendía, 2003).

Un primer efecto de este entrecruzamiento entre cultivos ilícitos y conflicto es que las grandes cantidades de dinero generadas por la economía de la coca a nivel nacional -en especial en las etapas de procesamiento, transporte y comercialización del producto final- han permitido a los actores armados disponer de recursos que hubiesen sido inimaginables treinta años atrás, lo que a su vez les ha brindado la posibilidad de aumentar su pie de fuerza y escalar la guerra. La conversión de las Farc en ejército irregular y su rápida multiplicación en las últimas décadas, por ejemplo, no habrían sido posibles si no se contara con una fuente de recursos de estas dimensiones.

No es casual que el narcotráfico se haya convertido en una de las principales fuentes de financiación de las Farc, pues éste se desarrolló fundamentalmente en los territorios bajo su dominio. No obstante, la condena moral que pesa sobre este negocio por parte de la mayoría de la sociedad colombiana ha llevado a las Farc a negar el peso de la coca en sus finanzas, actividades y decisiones, dando lugar a una percepción de hipocresía en ciertos sectores. Como señalan algunos analistas,

“Tal vez una de las paradojas que ha tenido mayores consecuencias negativas para la legitimidad política del proyecto de las Farc es la patente contradicción entre los presupuestos teóricos de esta organización guerrillera y sus prácticas y conductas concretas, una de las cuales tiene que ver con su relación con el narcotráfico. Se trata, sin duda, de que el proceso de consolidación de las Farc y su encuentro con los frentes de colonización cocalera en los 80 y de amapola en los 90 produjo un tipo de guerrilla que debe leerse en clave 'traqueta' o 'mafiosa'. Es decir, su inserción local debería hacerse de acuerdo a esas realidades de sociedades colonizadoras en construcción y con los actores que resultan de las economías cultivadoras de coca. Pero lo anterior no ha tenido mella en el discurso político y en el programa del

grupo armado, que continúa siendo sólo la combinación de un discurso agrarista y ortodoxo con altas dosis de pragmatismo al momento de ejercer el control territorial y sacar los excedentes económicos necesarios para fortalecer su ejército” (González, Bolívar y Vásquez, 2003: 58).

Para las Farc, la probabilidad de hacer presencia en un municipio aumenta en 154.7%, si este municipio tiene cultivos ilícitos. Para el modelo del ELN, por contrario, la presencia de cultivos ilícitos no explica su presencia municipal (Vélez, 2001). Este fenómeno estadístico se relaciona sin duda con el hecho de que, como han señalado diversos analistas, el ELN “a diferencia de las Farc, se negó – al menos hasta hace poco tiempo y de manera más localizada- a involucrarse en el negocio del tráfico de drogas. Esta decisión, ligada a sus rígidos fundamentos éticos, le significó entrar en una etapa de ingresos decrecientes, o al menos insuficientes para escalar la confrontación” (Pizarro, 2004: 106).

Esta posición de rechazo a la producción y tráfico de estupefacientes, sin embargo, no ha permanecido inalterada en las últimas décadas. Tras fracasos como el de la Serranía de San Lucas, en el departamento de Bolívar, donde su oposición a los nacientes cultivos de coca le costó al ELN gran parte de su apoyo popular y abrió las puertas al paramilitarismo, que los fomentaba sin complejos, el movimiento ha desarrollado una posición bastante más flexible que le permite convivir con la economía cocalera y beneficiarse de ella, aunque la posición política de su dirigencia siga sin dar cuenta de ello.

Un segundo efecto de los cruces entre coca y conflicto ha sido la idea -ampliamente publicitada por las Fuerzas Armadas del Estado y sus aliados políticos- de que las 'narcoguerrillas' carecen por completo de objetivos políticos, están absolutamente dedicadas a la producción y tráfico de estupefacientes y únicamente perpetúan la guerra por motivos económicos.

Ello contribuye a la indiferenciación entre civiles y combatientes en las zonas cocaleras, con graves consecuencias para los primeros. Investigadores como María Clemencia Ramírez (2001: 66) han mostrado cómo en la región amazónica, “Los campesinos que cultivan coca se describen como controlados y aterrorizados por las Farc, y dispuestos a participar en actividades terroristas ordenadas por estras, así como a unirse a las filas del Partido Comunista. Esta afirmación considera que los civiles participan en la organización de las Farc y, por este motivo, se vuelven objetivos de la llamada *guerra contra las drogas*. Así, la línea que diferencia entre combatir a narcotraficantes y a rebeldes se borra” (Ramírez, 2001: 66, énfasis original).

Este no es el caso para el Cauca, donde la naturaleza eminentemente externa de las Farc y las dinámicas campesinas de cultivo de coca dejan clara la distinción entre cultivadores y guerrilleros aún para los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, pero ello no impide que la percepción generalizada sobre la univocidad esta relación impida con frecuencia a la opinión pública apreciar los matices que la conforman.

Colibrí

Esta comunidad, a la que llamaremos Colibrí, se encuentra entre la Cordillera Occidental y el océano Pacífico. Carece de vías de acceso, redes de electricidad, alcantarillado, telefonía fija o móvil, y sus habitantes deben recorrer tres horas de camino a pie o a caballo para llegar al vecino corregimiento de El Robledal y seis más en un camión hasta a la cabecera municipal más cercana o a Popayán, la capital de la provincia.

Se trata, en términos generales, de una región de selva subandina poblada a partir de la migración colonizadora, y cuyos predios entran casi sin excepción en la categoría de pequeña propiedad (5 a 20 hectáreas) a la que pertenecen el 93,06% de los predios del departamento, los cuales, sin embargo, ocupan sólo el 23.86% de su superficie según datos de 1997 (Paz, 2001). Entre los cultivos que cubren las montañas de la zona se encuentran sembrados de plátano, yuca, caña, frutas y hortalizas, y potreros en que se practica la ganadería a pequeña escala, “con pocas cabezas de ganado, lo que permite la rotación de potreros y posibilita niveles de subsistencia compartida entre el autoconsumo y el mercadeo de productos lácteos a pequeña escala, convirtiendo al ganado en un factor de ahorro frente a situaciones difíciles (Tocancipá, 2001: 377).

Si bien no existen datos demográficos específicos para las aproximadamente 30 familias que habitan el corregimiento de Colibrí, algunas características pueden inferirse de los promedios regionales. Los años promedio de estudio para los hombres en la región Cauca-Nariño son 3.8, y el promedio femenino es aún menor. Para esta región, se encontró que menos de la mitad de las mujeres en edad fértil (44.5%) tienen educación secundaria (Profamilia, 2000), y si se tiene en cuenta que estos datos incluyen las ciudades de Popayán y Pasto, capitales departamentales, puede suponerse que, de contarse con datos específicamente referidos al contexto rural, es casi seguro que la proporción de escolaridad femenina sería substancialmente menor.

Los pobladores de esta zona se definen a sí mismos como campesinos, y corresponden a la caracterización que de dicha categoría se hace desde la academia según la cual “campesino es todo aquel que posee una parcela más o menos pequeña, sea como dependiente de una gran propiedad (peón, aparcerero, arrendatario), sea como propietario independiente (incluidos los minifundistas cuya parcela no produce suficiente para vivir de ella); quien emprende la explotación de esta al menos parcialmente con trabajo familiar y cuya situación se asocia a algún grado de pobreza” (Meertens, 2000: 33).

Ello no excluye, por supuesto, que las ocupaciones de esta población ocasionalmente vayan más allá de las tareas asociadas a la tierra, tanto por la inserción de miembros de la comunidad en el sector de servicios o los grupos armados, como por las dinámicas de la economía cocalera. En cualquier caso, como señala Suhner (2002: 30), “el campesino no necesariamente tiene que ser un agricultor, puede ser también pequeño comerciante o vendedor, trabajador agrícola asalariado, etc., o varias de esas cosas a la vez. El campesino es el integrante de una sociedad más compleja con una variedad de intereses y tipos de organización. [...] El campesino como sujeto social varía en el tiempo, de modo que cada época y cada circunstancia política, socioeconómica o cultural tienen un tipo de campesino diferente”.

En este caso, se trata mayoritariamente de un campesinado que podría llamarse 'tradicional',

organizado en unidades de vivienda correspondientes por lo general a familias nucleares (y en algunos casos extensas) de entre 3 y 10 personas, dispersas en la escarpada topografía de la zona. Las mujeres se ocupan del aseo de la casa, el cuidado de los hijos y la preparación de alimentos, así como de algunas tareas agrícolas, mientras los hombres asumen otras y representan a la familia en la mayor parte de las transacciones comerciales y de la relación con el Estado.

Se trata de un área con escasa penetración de los medios masivos -salvo la radio, compañera inseparable de las labores domésticas y agrícolas con sus canciones de amor, traición y despecho-, donde las actividades de esparcimiento suelen incluir juegos de cartas o dominó, en especial por parte de los hombres, la asistencia a la capilla evangélica y el mercado semanal, con las oportunidades de socialización que ellas ofrecen.

Otro espacio de encuentro se construye en las actividades de trabajo comunitario (allí llamadas minga, de acuerdo con el término quechua para el trabajo colectivo gratuito orientado al bien común). Subsanan baches y derrumbes en la precaria carretera que une al mercado con la cabecera municipal para permitir el paso de vehículos de carga y pasajeros, adecuar las instalaciones de la escuela o cocinar para un evento comunitario son algunas de las ocasiones en que los habitantes de Colibrí unen sus fuerzas.

Los jóvenes

Los adolescentes de Colibrí se mueven cotidianamente entre la autoridad de padres y maestros, los poderes armados -Ejército y ELN, en particular- y una peculiar relación con el Estado colombiano.

Las diferencias internas entre las costumbres y aproximaciones de estos adolescentes son difícilmente identificables, pues existe una cierta homogeneidad superficial entre sus posiciones (y las de los adultos a su alrededor). Su autoidentificación parte de referentes familiares, geográficos y de género, y sólo en ciertos casos etéreos. Ante la ausencia de la pregunta por las expectativas, éstas se articulan, inexpresadas, en el transcurrir predecible del ciclo vital, y el interrogante sobre las mismas da origen a un proceso individual de exploración más que a la enunciación de un conjunto de deseos o planes previamente definidos.

Las implicaciones del conflicto en el desarrollo psicosocial de los adolescentes, por otra parte, son difícilmente diferenciables en la medida en que parten de una naturalización que es anterior a ellos y en la que han sido socializados⁵. Como se ha mostrado para otras regiones del país, en algunas comunidades la violencia ha perdido el carácter extraordinario con que suele vérselo desde fuera, para convertirse en un elemento más de lo cotidiano (Madariaga, 2006). Esta naturalización permite al conflicto tomar su lugar en el lenguaje, el cuerpo y las relaciones, y rompe las barreras -cruciales desde lo exterior- entre combatientes y civiles, entre otras categorías. Ejemplo de ello son las 'visitas' que patrullas de soldados o guerrilleros hacen con frecuencia a los hogares civiles para descansar, tomar agua de panela o, en las escasas viviendas que cuentan con un generador eléctrico, ver

5 Sobre este tema, véase por ejemplo Schmidt (2002).

televisión. El riesgo que esto representa, tanto por la posibilidad de quedar en medio de un enfrentamiento como por la hostilidad que cada grupo tiene contra quienes considera auxiliares de su enemigo, es un elemento que incluso los niños pequeños aprenden a manejar con discreción.

La medida hasta la cual estos adolescentes pueden ser llamados ‘jóvenes’ es discutible. Gran parte de la literatura sobre juventud la define como un momento de moratoria social en que los individuos están exentos de demandas productivas y concentran su tiempo y energía en la construcción de estilos de vida, relaciones entre pares y exploración del mundo a su alrededor desde una perspectiva ética y estética radicalmente diferenciada de la de sus mayores. Si bien las edades con que se asocia fluctúan, muchas veces se le localiza aproximadamente entre los 12 y 25 años, y se asocia con la percepción de una distancia respecto de la muerte mayor que la atribuida a adultos y ancianos.

No obstante, la literatura también nos recuerda que “la concepción de juventud es una construcción social que produce a su vez realidades, en la medida en que los sectores juveniles llegan a asumirse desde tales categorías que han sido concebidas para ellos” (Ferro et al., 1999: 146). Ello significa que no se es joven de la misma manera en los diversos contextos sociales y momentos históricos, que para representarse como joven de una determinada manera es necesario que existan referentes socialmente construidos a esta franja y que la ‘juventud’, más que una franja etárea, es una condición a la que sólo algunos integrantes de esa franja pueden acceder. Se ha dicho, por ejemplo, que mientras en las clases medias y altas de las ciudades la juventud puede llegar hasta los 35 años, en el campo a los 10 años se deja de ser joven (Parra, 1991).

Esto tiene que ver con el acceso diferenciado a los distintos componentes que hacen parte de la categoría académica de juventud, en particular la llamada moratoria social, que, como señalan Margulis y Urresti (1998: 4) “es un privilegio para ciertos jóvenes, aquellos que pertenecen a sectores sociales relativamente acomodados, que pueden dedicar un período de tiempo al estudio –cada vez más prolongado– postergando exigencias vinculadas con un ingreso pleno a la madurez social: formar un hogar, trabajar, tener hijos. Desde esta perspectiva, la condición social de ‘juventud’ no se ofrece de igual manera a todos los integrantes de la categoría estadística ‘joven’”⁶.

Los jóvenes rurales, en particular, suelen estar excluidos de esta condición. En las sociedades campesinas la familia es la unidad productiva primordial, y los cónyuges e hijos la principal fuerza de trabajo con que cuentan los ‘jefes de familia’, que casi siempre son hombres. Este es el caso en Colibrí, donde a los niños y niñas se les asignan tareas en la casa y el campo a partir, aproximadamente, de los seis años de edad, y se les otorga una carga laboral completa generalmente alrededor de los doce. Ellos se involucran en las tareas relacionadas con la coca, del mismo modo que participan en el cuidado de los sembrados de pancoger, acarrear agua y conducen ganado⁷.

6 Véanse, entre otros, Margulis y Urresti (1996) y Cubides et al. (1998).

7 Incluso algunas niñas a partir de los ocho años se emplean ocasionalmente como jornaleras en fincas vecinas, y son reconocidas por su habilidad para la recolección de coca.

Ello lleva a una temprana inserción en las prácticas y responsabilidades que en otros contextos se suponen ‘adultas’, de modo que al igual que en gran parte de las áreas campesinas, e incluso en muchas zonas populares, “los niños se involucran en procesos de prematura adultez, donde su vida se define desde los marcos del trabajo y no a partir de las ofertas del consumo” (Valenzuela, 2002, 38). Así mismo, es necesario recordar que el concepto de juventud se ha construido de la mano con el de ruptura generacional, ruptura que en el caso de los adolescentes campesinos de esta región no parece revestir gran importancia. A diferencia de lo que suele observarse en los jóvenes urbanos, en Colibrí niños, adolescentes y adultos coinciden por lo general en su lenguaje, gustos -musicales, gastronómicos, estéticos- y actividades.

Estas condiciones, sumadas a la tendencia tradicional de conformar hogares y tener descendencia a edades que en otros contextos se consideran juveniles, ubica a muchos adolescentes campesinos en un lugar que no corresponde con la categoría juventud. En Colibrí, por ejemplo, a las mujeres se les considera listas para conformar una familia alrededor de los diecisiete años, y la mayoría de las parejas tiene su primer hijo antes de los veinte. Del mismo modo, menores de edad de uno y otro sexo se han incorporado al ELN, así como algunos varones adolescentes han elegido ingresar a las fuerzas armadas estatales, ya sea en búsqueda de mejores condiciones económicas, tras la esperanza de obtener algún nivel de prestigio y poder, por ‘amor a las armas’ o como forma de independizarse de su familia de origen⁸.

Estos ‘jóvenes’ no están pues en absoluto exentos de responsabilidades laborales y productivas, y en términos generales carecen de medios y espacios para consagrarse a la construcción de relaciones entre pares en el sentido tradicionalmente asociado a los jóvenes, así como para desarrollar estilos de vida asociados con el consumo (en este punto la ausencia de energía eléctrica, y con ella de televisión, juega un papel fundamental, en la medida en que no cuentan con los referentes de los medios masivos ni con el poder adquisitivo para entrar en los circuitos de consumo que en otros contextos se consideran propios de la juventud).

Los adolescentes de Colibrí carecen de más espacio de encuentro entre sí que la escuela – cuando asisten a ella- y una eventual asistencia al mercado, a eventos de carácter religioso o comunitario, o la simultánea vinculación como jornaleros en una finca en cosecha. Si bien al tratarse de una comunidad pequeña todos se conocen entre sí, aquí no existe, como en los contextos urbanos, la posibilidad de encontrarse en la esquina, en el cine o en la discoteca. Las distancias entre las viviendas y la ausencia de espacios de encuentro se conjugan para hacer de la familia el escenario fundamental de trabajo y ocio de los y las adolescentes. Y aunque se ha señalado que las zonas de cultivos ilícitos suelen implicar para los jóvenes campesinos una ampliación y diversificación de los espacios de socialización, mayores posibilidades de elección de pareja, acceso temprano a espacios de diversión y ocio e independencia prematura de la familia de origen (Ferro et al., 1999), ninguno de estos rasgos tiene lugar cuando, como en Colibrí, los jóvenes continúan haciendo parte de una

⁸Si bien estos fueron los motivos mencionados por habitantes de Colibrí para explicar el enrolamiento de los jóvenes, el Informe Nacional de Desarrollo Humano de Colombia señala una veintena de motivos comunes para tal decisión –entre ellos varios de orden ideológico-, todos ellos probables también en este caso (Gómez Buendía, 2003).

comunidad estable y relativamente aislada, donde el poder adquisitivo (escaso como es) sigue estando fundamentalmente en manos de sus padres.

Las manifestaciones de la disparidad entre el modelo de la literatura y la realidad de los jóvenes de esta zona, por lo demás, comienzan aún antes de la adolescencia. La infancia misma es una instancia problemática cuando se pretende aplicar los estándares de la sociedad burguesa a las comunidades pobres de las zonas rurales. Jesús Martín-Barbero ha señalado que “es sólo a partir del siglo XVII que la infancia ha empezado a tener existencia social”, pues en otros momentos históricos “los niños han vivido todo el tiempo revueltos con los mayores: revueltos en la casa, en el trabajo, en la taberna y hasta en la cama” (Martín-Barbero, 1998: 28).

Esto nos recuerda que la división entre niños, jóvenes y adultos no es en absoluto natural, y abre la pregunta por la validez del trabajo en edades tempranas. Al respecto, Nieuwenhuys (1996) ha mostrado cómo la valoración del trabajo infantil varía de acuerdo con las circunstancias históricas, culturales y económicas, y cuestiona los criterios con los que ciertos modos de trabajo infantil (generalmente efectuados en pro de la economía familiar y no remunerados) son vistos como oportunidades de aprendizaje y socialización, mientras otros se ven como explotación.

Ejemplo de ello es que, mientras en zonas como el Caquetá llama la atención de los investigadores “la especial preocupación que manifiestan los padres, maestros, líderes y adultos sobre el impacto cultural que los cultivos de coca y amapola han tenido sobre los jóvenes” (Ferro et al., 1999: 20) en Colibrí dicha preocupación no parece existir más allá de la inquietud de las maestras ante el hecho de que incluso los adolescentes que cuentan con apoyo familiar para cursar la secundaria opten con frecuencia por abandonar la escuela para dedicarse a las labores agrícolas, en especial la coca, que les provee recursos que el estudio no garantiza en el mediano o largo plazo, y mucho menos de forma inmediata.

La coca en Colibrí

El cultivo central en la topografía y la economía del corregimiento de Colibrí es la coca de variedad 'pringa', que ha reemplazado las anteriores versiones (llamadas 'caucana' y peruana'). Como se ha señalado, existen básicamente dos tipos de plantaciones de coca en el país. Mientras que “los cultivos comerciales de coca son de aproximadamente 30 hectáreas, cuentan con operaciones agrícolas modernas, tienen sus propios laboratorios de refinación y sistemas de exportación y están, por lo general, ubicados en tierras baldías del gobierno, [...] Los cultivos campesinos, es decir, aquellos manejados por una familia, son parcelas de menor dimensión que generalmente están sembrados junto a plantaciones de pancoger (plátano, yuca y maíz) y ganado” (Devis, 2004: 2). Este es el caso de Colibrí, donde la mayor parte de los 'cortes' ocupan menos de una hectárea y conviven con otros productos agrícolas.

La pequeña escala del negocio tiene implicaciones que van mucho más allá de los volúmenes de producción. El carácter familiar del trabajo, la coexistencia de la coca con cultivos de consumo local, el escaso flujo de dinero y la ausencia de población flotante se

unen para configurar una dinámica social particular en contextos como el de Colibrí.

De los tres tipos de violencias que según Ferro et al. (1999) se entrecruzan en las zonas de cultivo de coca (la delincuencia común por el alto flujo de dinero, los ajustes de cuentas entre narcotraficantes y la violencia ejercida por la guerrilla), esta localidad sólo enfrenta de manera directa la tercera, y sus miembros no vinculan su propia acción con ninguna de ellas, así como no relacionan su trabajo diario con el consumo de alcaloides, con el que no tienen contacto directo.

La prostitución, el consumo generalizado de alcohol y drogas, las riñas, los robos y la violencia sexual, entre otros fenómenos que suelen asociarse al cultivo de coca, son en realidad correlatos de las economías de enclave que traen consigo un alto flujo de dinero y numerosa población flotante, generalmente en contextos donde no existen instituciones reguladoras (familia, Estado, iglesias) cuya autoridad sea ampliamente reconocida. En Colibrí, donde la coca está inserta en la dinámica productiva familiar y los réditos que produce son escasos, no se verifica ninguna de esas situaciones.

Sólo en ocasiones que requieran mayor fuerza de trabajo que la del conjunto de los miembros de la familia se recurre a la contratación de vecinos y amigos por un jornal de 12 mil pesos (unos seis dólares) al día, el mismo que se paga por otras actividades agrícolas. Esto establece una diferencia substancial con regiones de cultivo comercial como el Putumayo, donde el pago por arroba que recibe un raspachín es el 10% del valor de una arroba de hoja (Ramírez, 2001).

En cuanto al procesamiento, se realiza de forma artesanal en pequeñas enramadas dentro de las fincas, y de cada arroba de hoja se sacan aproximadamente 40 gramos de pasta base. Un kilo de esta pasta, producido con una inversión aproximada de un millón de pesos se vende en el mercado local en aproximadamente 2 millones 200 mil pesos (mil dólares), una cifra que, obtenida cada tres meses, dista de ser suficiente para sobresalir de la línea de pobreza, pero brinda recursos para cubrir necesidades de vestido, aseo, transporte, educación y entretenimiento, entre otros que la economía campesina de subsistencia no alcanza a granatizar.

Los compradores a su vez llevan la pasta a los cristalizaderos o ‘cocinas’, laboratorios de gran tamaño, ubicados fuera de la zona, donde es procesada para convertirla en cocaína y comercializarla, generalmente para su exportación.

El cultivo de coca involucra prácticamente a todos los miembros de la comunidad, entre ellos niños y jóvenes, quienes en ocasiones alternan con sus actividades productivas la asistencia a la escuela local.

Los conocimientos y habilidades necesarios para sembrar, fumigar, recolectar y procesar la hoja de coca, de hecho, son por lo general transmitidos de padres a hijos o por otras redes de consanguinidad o afinidad. Y al ser las cosechas (tanto de coca como de otros cultivos) una ocasión de encuentro y trabajo colectivo para las familias y el conjunto de la comunidad, la idea de que en presencia de cultivos ilegales necesariamente “se disuelven los lazos familiares y las organizaciones sociales, surge un individualismo extremo”

(Galindo y Martínez, 2001: 188), resulta discutible.

Ello permite cuestionar las aseveraciones según las cuales “la violencia y la corrupción están presentes en toda la cadena, en todos los momentos y en todos los territorios en que se desarrolla y perfecciona el cultivo, procesamiento, transporte, comercialización y consumo del alcaloide” (Quintero, 2001: 55). Y no sólo porque es claro que no todos los contextos funcionan de igual manera, sino porque para quienes hacen parte de esa cadena sí existen substanciales diferencias –de tipo moral, incluso- entre las distintas etapas del proceso. Como se ha señalado para el caso del Caquetá, “En la medida en que se avanza en la cadena de producción y comercialización empieza y va creciendo la valoración negativa. [...] La gente sabe que en la medida en que se sube por la pirámide ocupacional o social del narcotráfico hay más riesgo de cometer delitos conexos a los de la producción y comercialización de coca y cocaína. [...] Por eso algunos renuncian a ascender por esa pirámide o simplemente se devuelven.” (Ferro et al., 1999: 267-268). Esto puede explicar el hecho de que, aunque las ganancias son exponencialmente mayores en esa etapa del proceso, el único intento por establecer un cristalizadero en la zona de Colibrí fue saboteado por la comunidad misma.

Entre los pobladores de esta zona existe un esfuerzo casi consciente por mantenerse del lado correcto de una frontera imaginaria según la cual la venta de la pasta base es la última etapa del proceso en la que uno puede involucrarse sin entrar en el violento mundo del narcotráfico, reforzando así “la diferencia que establecen los habitantes de estas zonas entre los cultivos ilícitos como estrategia de sobrevivencia, que responde a una problemática socioeconómica del país, y el comportamiento de los narcotraficantes” (Ramírez, 1999: 17).

Este no es, sin embargo, el único contexto en que se construyen ese tipo de distinciones. Respecto del tráfico de automóviles robados en Venezuela e ingresados de contrabando a Colombia por la frontera Guajira, por ejemplo, Orsini (2007) muestra cómo las diferentes actividades involucradas en esta práctica determinaron posiciones morales diferentes. La de “una empresa de carácter estrictamente delictivo vinculada a otros delitos como el asesinato o el secuestro”, y la de los ciudadanos que “no sentían –ni sienten hoy- que estaban colaborando con una actividad delincuencia” (Orsini, 2007: 127).

Interacciones entre coca y conflicto en Colibrí

En la zona de este estudio operan el Frente Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional ELN - Frente José María Becerra, Columna Milton Hernando Ortiz-, los frentes Octavo y Sesenta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc –en especial la Columna Móvil Miller Perdomo- (OCHA, 2007) y tropas gubernamentales pertenecientes al Batallón de Infantería # 7, 'General José Hilario López', adscrito a la Tercera Brigada.

Su ubicación ha convertido a la región en un corredor para el paso de tropas, cocaína, armas y personas secuestradas entre la región andina y el mar Pacífico. Las guerrillas del ELN y las Farc se disputan el control militar de la zona, mientras el ejército estatal busca establecerse en ella como parte de una estrategia gubernamental de recuperación del

territorio. Para los pobladores de Colibrí, ello se traduce en presencia armada, regulación de las transacciones comerciales (particularmente el comercio de pasta base de coca) y minas antipersona⁹.

Para el tema de la inserción territorial de los grupos guerrilleros, se han señalado básicamente dos tipos de escenario:

En primer lugar están las *regiones endógenas*, donde las guerrillas tienen presencia y dominio más bien consolidado, donde proveen bienes colectivos importantes y por tanto cuentan con apoyo de la gente. Esta categoría incluye *regiones de origen*, donde la guerrilla es parte establecida del engranaje social y donde provee diversos bienes colectivos, particularmente ordenar la convivencia ciudadana y administrar justicia, y *regiones de ilegalidad*, donde las guerrillas amparan las economías ilegales hasta convertirlas en distritos de captación de rentas. Además del amparo a la ilegalidad, la guerrilla provee allí bienes de seguridad y convivencia ciudadanas.

Un segundo escenario lo constituirían las *regiones exógenas*, donde las guerrillas no están integradas a la estructura social pero sí obtienen recursos importantes, por lo cual buscan el apoyo mínimo necesario para operar contra la fuerza pública y otros actores armados. Estas pueden ser *regiones de campesinado en descomposición*, donde los armados no controlan el orden pero aprovechan la crisis económica para reclutar combatientes y apoyos, *regiones de captación de rentas*, donde existe riqueza y una capa social susceptible de ser extorsionada para hacerse a recursos provenientes de ganadería, palma de aceite, banano, oro o petróleo, o *centros urbanos mayores*. (Gómez Buendía, 2003, énfasis originales).

La zona de este estudio se encontraría en un intermedio entre región endógena de ilegalidad y región exógena de campesinado en descomposición tanto frente al ELN como a las Farc, aunque en las relaciones cotidianas el ELN está mucho más articulado en la comunidad que su competidor. Esto nos recuerda que, como señalan González, Bolívar y Vásquez (2003: 205) a partir del modelo desarrollado por Wickham-Crowley, “el apoyo de los campesinos a la guerrilla no se da [únicamente] por la coacción, ni por convencimiento ideológico, ni por compartir el 'sentido' de la acción. Tal apoyo y tal pacto se constituyen a partir del hecho mismo de que comparten un territorio y, una vez ahí, la interacción social genera sus propios recursos”.

El hecho de que el ELN goce de una relativa familiaridad con los pobladores no significa, sin embargo, que las relaciones sean especialmente fluidas. La práctica del ELN de sembrar minas antipersona en los caminos de Colibrí –en las que han caído, además de miembros de otros grupos y sus propios combatientes, jóvenes de la comunidad-, ha afectado especialmente su legitimidad, y con ella la disposición de los campesinos de someterse a su autoridad.

⁹ En este municipio, de hecho, se registró un promedio de 2.6 eventos mensuales por minas antipersona y municiones sin explotar en el año 2005, correspondientes al 34.2% de los registrados en la totalidad del departamento (Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, 2005). El notorio subregistro derivado del aislamiento geográfico, sin embargo, permite suponer que el número real de accidentes es mucho mayor.

El ejército colombiano, por otra parte, es quizá el más foráneo de los actores en esta región. Pues a diferencia de los guerrilleros del ELN, que generalmente tienen algún grado de consanguinidad o afinidad con los miembros de la comunidad, los soldados del Estado son percibidos como agentes externos, ya que por lo general no son nativos de la región y su asignación en Colibrí es de carácter temporal. Su poder está basado fundamentalmente en el temor que generan, y no cuentan con un respaldo fuerte entre los pobladores. Se les percibe como arbitrarios y corruptos, aunque en ocasiones se les aprecie a título personal.

Las implicaciones de esta inserción diferencial se evidencian en la medida en que, al habitar un territorio en disputa, los pobladores enfrentan lo que Uribe (2001: 266) llama “una coimplicación de órdenes autoritarios y verticales” que les exige afrontar simultáneamente las demandas y amenazas de varios grupos armados, especial teniendo en cuenta que tanto los grupos guerrilleros como el ejército estatal participan en el tráfico de coca y sus derivados y obtienen ganancias de él.

El ELN ha establecido un ‘impuesto’ de aproximadamente el 5%, que acostumbra cobrar a quienes trafican pasta base en los lugares que controla. Los soldados del Ejército estatal, por su parte, suelen decomisar una parte de la mercancía a quienes sean sorprendidos transportándola, para luego proceder a comercializarla ellos y conservar las ganancias. Otra práctica común por parte del Ejército es retener la pasta base encontrada y negociar su devolución al propietario a cambio de una suma de dinero que puede ascender al 50% de su valor total. No se ha sabido en cambio de caso alguno en que el portador de mercancía ilegal haya sido judicializado y su carga destruida, como prescribe la ley.

La percepción de muchos campesinos e incluso de algunos representantes del Estado en la región es que existe un acuerdo entre Ejército y ELN para manejar el tráfico de coca y sus derivados en la región, así como para mantener a raya a las Farc. Ello explicaría la constante presencia de miembros de uno y otro grupo en puntos geográficamente cercanos sin que se produzcan enfrentamientos, así como la renuencia de las Fuerzas Armadas Estatales a tomar medidas que afecten realmente la producción y el tráfico de pasta de coca en la región.

De esta manera, la intervención de los grupos armados -legales y legales- en el comercio de coca ha llevado a la creación una serie de estrategias de evasión de las exigencias de estos agentes armados, que se expresa, entre otras cosas, en el uso de atajos (práctica de alto riesgo debido a las minas antipersona), los ‘campaneros’ encargados de verificar la seguridad del camino antes de que pase la carga, y, en último caso, el retorno de la mercancía al punto de origen para intentar comercializarla en ausencia del actor armado correspondiente.

La relación con el Estado

La presencia del estado colombiano en Colibrí es desigual. No hay más red de servicios públicos que el rudimentario sistema de acueducto veredal establecido por los pobladores mismos, ni más vías de comunicación que las trochas que ellos mismos han abierto para desplazarse hasta el corregimiento vecino de El Roble (a tres horas de camino), donde se

realiza el mercado semanal y se encuentra transporte hacia la cabecera municipal. En ese mismo corregimiento se encuentra el Centro de Salud más cercano, y toda diligencia legal -registros civiles, escrituras, etc.- debe realizarse en la cabecera municipal, a 6 horas en bus de El Robledal.

En Colibrí existe una escuela primaria, con una profesora que, de acuerdo con el modelo de 'Escuela Nueva' común en las zonas rurales, educa a la vez a todos los estudiantes de primero a quinto grado. Recientemente se implementó adicionalmente el programa de 'Telesecundaria', que con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional ofrece a los jóvenes que han concluido sus estudios primarios en zonas aisladas material didáctico para iniciar sus estudios de secundaria, con el apoyo de un docente capacitado.

En la zona no existen autoridades de Policía, ni más representantes del Estado que las profesoras de la escuela y los dos guardaparques asignados a la zona por el Parque Nacional Natural Munchique, a cuya zona de amortiguación pertenece el corregimiento. Dichos guardaparques, provenientes de comunidades vecinas, promueven prácticas de conservación ambiental (cuidado de las fuentes de agua, protección de especies en peligro, estabulación de ganado, etc.) pero no intervienen en las decisiones de los campesinos sobre el uso de la tierra ni condenan el cultivo de coca.

Entre los habitantes de Colibrí, la política es concebida como algo ajeno y necesariamente corrupto, salvo en el nivel más local en que se la percibe como un asunto plenamente operativo. La irrupción de planteamientos de naturaleza eminentemente política en las reuniones comunales, ya sea por parte de representantes de la guerrilla o el Estado, es vista con recelo y rara vez encuentra eco en una comunidad cuya actividad política no se reconoce como tal y no incluye en términos generales la inserción en el sistema electoral. Adicionalmente, el hecho de que en este territorio los agentes mismos del Estado contribuyan a la violación de su propia legalidad contribuye a la complejidad de la relación entre la comunidad y las leyes.

Muchos habitantes de Colibrí, sin embargo, toman parte en las instancias de participación ciudadana establecidas por la Constitución Nacional. En particular, es notoria la participación en la Junta de Acción Comunal, mediante la cual se canalizan trabajo y recursos de la comunidad para fines como la adecuación de la escuela y el mejoramiento de los caminos, junta cuyos miembros, casi sin excepción, tienen en la coca su actividad económica principal.

Como ha señalado Pécaut (1994: 6), “los campesinos tienen sus propias formas de organización y no esperan mucho del Estado. Sin embargo, a pesar de eso, al mismo tiempo -y como parte de una forma de sociabilidad campesina- esos mismos campesinos están atentos a ver si el Estado hace algo. Esta ambivalencia prevalece en muchos sectores con relación al Estado: la desconfianza sigue presente, pero siempre acompañada al mismo tiempo de una solicitud de mayor presencia del Estado”. Esta situación, de hecho, no es exclusiva de Colibrí. Para el caso del Putumayo, el alcalde de un municipio cocalero señalaba: “cuando la coca está a buen precio los campesinos aportan para pagar maestros, para combustible de la volqueta, para la construcción de la carretera, y cuando los precios bajan, todos van a parar a la alcaldía para que les ayude” (Citado en Ramírez, 2001: 257).

En Colibrí el Estado es percibido de manera fragmentaria: una cosa es la Secretaría de Educación, que envía profesoras y materiales para la escuela, otra son las Fuerzas Armadas, otra los programas de Acción Social, otra las leyes antinarcóticos. Resulta perfectamente factible oponerse al Estado en algunas de sus formas, apoyarlo en otras y ser beneficiario de unas terceras. En ese sentido, las personas en Colibrí parecen tener claro que, como señala Smart (1999: 100), “los estados son internamente complejos y están compuestos por muchos agentes. Es por lo tanto inapropiado referirse a los estados como que hacen o pretenden cosas”.

Los jóvenes de Colibrí y sus padres infringen las leyes colombianas sistemáticamente al cultivar, procesar y vender coca, y lo saben. Ello no significa, sin embargo, que se perciban a sí mismos como opuestos al Estado o como personas ‘por fuera de la ley’¹⁰. Como muestran Heyman y Smart (1999), la relación entre Estado y sociedad es procesal, no estática, y lo que es legítimo en la ley formal, en las prácticas reales y en la percepción de las comunidades por lo general es diferente, y cambia con el tiempo.

Evadir ciertas partes de la ley y a sus representantes no significa, en la lectura de los habitantes de Colibrí, una oposición al conjunto del Estado, ni mucho menos la pérdida de los derechos, entendidos especialmente como la responsabilidad del gobierno de destinar recursos para las necesidades de educación, salud y transporte de la zona, responsabilidad cuyo precario cumplimiento en la actualidad es registrado por los campesinos como una falta del Estado hacia ellos. En ese sentido, “El reconocimiento de los distintos grados de poder del Estado en las regiones hace importante la pregunta, no tanto por la ausencia del Estado o por su debilidad, sino por su proceso de formación, por su relación con la sociedad que pretende controlar y por su tipo de vinculación con las distintas formas de control social” (González, Bolívar y Vásquez, 2003: 220).

Hemos visto que en el escenario de la coca “se tiende a perder el sentido de ilegalidad, dado su carácter generalizado. Al estar la región y la gran mayoría de sus habitantes involucrados directa e indirectamente en la actividad ilícita, se le confiere un cierto carácter de legitimidad” (Ferro et al., 1999: 265). Los cruces entre esa legitimidad y la consciente evasión de las leyes y las autoridades que deberían reforzarla –y que, en este caso particular, no lo hacen del modo que la ley misma establece- llevan a preguntarse dónde termina la obediencia y empieza la resistencia, una línea que, como ha señalado Scott (1985) suele ser muy difícil de trazar.

La conciencia de hasta qué punto los habitantes de Colibrí han construido lógicas y límites particulares dentro de su actividad económica ilegal nos invita a pensar este tipo de prácticas sociales, “no como una categoría de comportamientos anormales, y especialmente, no como la subcultura de un grupo estigmatizado, sino como una opción, un recurso, que diversos grupos usan en momentos particulares” (Heyman y Smart, 1999: 13).

10 Por lo demás, ya Smart y Heyman (1999) han señalado que si bien la creación de las leyes puede reflejar las agendas hegemónicas, la persistencia de ilegalidades y moralidades opuestas a la ley estatal es señal de que esa hegemonía continúa siendo disputada.

Consideraciones finales

La manera en que el fenómeno de los cultivos ilícitos en Colombia entrecruza componentes económicos, políticos, sociales y culturales requiere aproximaciones múltiples, abiertas e interdisciplinarias. Así, en las pasadas décadas se han realizado valiosos aportes desde diversos campos para comprender el origen, los motivos, las dinámicas y las consecuencias de la producción y comercio de estupefacientes, construyendo una base importante para la reflexión y la propuesta.

Las condiciones en que generalmente se realizan las actividades asociadas al cultivo, procesamiento y comercio de coca (regiones apartadas, control armado, ilegalidad, etc.), sin embargo, no ofrecen mayores oportunidades para un estudio etnográfico o microsociológico, por lo que suele ser la perspectiva general la privilegiada desde los estudios sociales del narcotráfico.

Esta mirada, no obstante, corre el riesgo de presentar como un fenómeno homogéneo lo que es en realidad un escenario múltiple y cambiante, que opera de maneras particulares según el territorio que ocupa y las personas que en él se involucran. En ese sentido, el reconocimiento de la diversidad de actores y posiciones en el mundo de los cultivos ilícitos contribuiría no sólo a una comprensión más clara de la problemática que ellos enfrentan, sino a aportar realismo y relevancia a las propuestas e iniciativas de sustitución que se plantean desde la academia y las entidades públicas.

Particularmente, es clara la necesidad de considerar los distintos contextos culturales en que se dan los cultivos ilícitos, e incluir en su caracterización a ese gran porcentaje de comunidades campesinas e indígenas cuyas condiciones no son las mismas de las plantaciones industrializadas, y que por lo tanto requieren estrategias diferentes por parte de las entidades que luchan contra el fenómeno del narcotráfico.

Del mismo modo, se hace imperativo explorar la forma en que los diversos actores involucrados en este fenómeno se relacionan entre sí, en formas que incluyen todos los matices de convivencia, conflicto, evasión y aquiescencia. El hecho de que el grupo humano aquí descrito y sus particulares construcciones de la legitimidad no se asemejen al estereotipo que sobre los cocaleros se ha construido desde el Estado y la academia es una invitación a adentrarse en las moralidades que entran en competencia cuando la ley formal no es la encarnación exclusiva de la moral social, y puede darnos nuevas pistas acerca de las formas en que la hegemonía es construida y disputada en esos territorios ‘periféricos’ que finalmente constituyen buena parte del territorio colombiano.

Similares retos presentan otros conceptos cruciales para este análisis, que exigen para sí una mirada ajustada a sus particularidades más que una noción general a la que la realidad deba adaptarse. Un esfuerzo por acercarse a las condiciones y prácticas de los jóvenes, por ejemplo, revela hasta qué punto las herramientas analíticas disponibles en nuestro medio para el análisis de fenómenos ‘juveniles’ se han centrado en una serie de características que excluyen a una proporción significativa de aquellos a quienes se supondría que contengan. Ser joven, campesino, cultivador de coca, habitante de un territorio en disputa, plantea cuestiones que podrían ampliar un poco los conceptos existentes para dar cabida a una

generación que hoy habita numerosos territorios no sólo de Colombia, sino de otros países latinoamericanos.

Comprender a estos jóvenes no sólo como mano de obra barata, carne de cañón, delincuentes o víctimas, sino como actores sociales que pueden ocupar diversos lugares en el mapa social de sus comunidades y relacionarse de formas diferenciadas con los poderes que los rodean es una invitación a valorar su diversidad y a preguntarse por las configuraciones particulares con que dotan de sentido su propia condición juvenil.

Las prácticas y percepciones desarrolladas por los jóvenes y adultos de esta población, por otra parte, dan cuenta de la complejidad de las relaciones que han construido con el Estado en sus diferentes manifestaciones. Su acción nos invita a cuestionar las lecturas dualistas de este tipo de relación, que reducen las opciones a obediencia u oposición, y a adentrarnos en la ambigüedad que la caracteriza, más aún en una zona donde las acciones de los representantes del Estado en el ámbito militar contribuyen de forma tan notoria a complicar la percepción de la institucionalidad y a minar la ya débil fe en los principios legales como reguladores de la vida social.

Tema aún más complejo es la relación con los grupos armados ilegales. La forma como las prácticas bélicas del ELN y las Farc deterioran las relaciones con aquellos a los que dicen representar superan el ámbito de este estudio, pero no por ello deben dejar de ser consideradas. Pues si bien resulta contraproducente reducir el conflicto colombiano a un epifenómeno del narcotráfico, como en ocasiones se propone, es también limitante desconocer la profundidad hasta la cual los grupos armados se involucran -y son transformados por- las condiciones de producción y comercio de estupefacientes, y las maneras en que su presencia y acción militar se ha transformado en las décadas recientes para privilegiar estrategias que no siempre responden a las necesidades expresadas por sus supuestas bases.

Más allá del aporte que pueda representar la caracterización de una comunidad particular de campesinos cultivadores de coca, entonces, este trabajo espera servir como recordatorio de la necesidad de explorar las realidades culturales de este tipo de poblaciones yendo más allá de nuestros estereotipos sobre los cocaleros, los jóvenes, los grupos armados y el Estado.

Bibliografía

Angulo, Alejandro et al. 2009 “¿En qué está la paz? Cifras del conflicto armado” En *Cien Días vistos por Cinep* (Bogotá) No. 66.

Betancourt, Darío y García, Martha 1994 *Contrabandistas, marimberos y mafiosos* (Bogotá: Tercer Mundo).

Cubides, Humberto el al., 1998 *Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades* (Bogotá: Siglo del Hombre / DIUC / Universidad Central).

CINEP, Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política 2009 “Cifras de la violencia política, Enero - Diciembre 2008” en <http://www.nocheyniebla.org/files/u1/38/03CIFRAS38.pdf>

Devis Durán, Lina 2004 “El narcotráfico colombiano como economía ilegal” Tesis de Economía Universidad de los Andes, Bogotá, Noviembre de 2004.

Díaz, Ana María y Sánchez, Fabio 2004 *Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia* (Bogotá: CESO / Universidad de los Andes).

Ferro, Juan Guillermo, Uribe, Graciela, Osorio, Flor Edilma y Castillo, Olga Lucía 1999 *Jóvenes, coca y amapola: un estudio sobre las transformaciones socioculturales en zonas de cultivos ilícitos* (Bogotá: Universidad Javeriana).

Galindo, Medardo y Martínez, Juan 2001 “Problemática social causada por los cultivos ilícitos en Colombia” en *Cultivos ilícitos en Colombia. Memorias del foro realizado en agosto de 2000* (Bogotá: Universidad de los Andes / Compartir / UNDCP).

García, Mauricio 2008 “El conflicto armado colombiano: ¿el fin del fin?” En *Cien Días vistos por Cinep* (Bogotá) No. 64.

Gómez Buendía, Hernando (Coordinador) 2003 *El conflicto, callejón con salida: Informe Nacional de Desarrollo Humano* (Bogotá: PNUD).

González, Juan Manuel 2001 “Retos y dificultades de la sustitución de cultivos ilícitos” en *Cultivos ilícitos en Colombia. Memorias del foro realizado en agosto de 2000* (Bogotá: Universidad de los Andes / Compartir / UNDCP).

González, Fernán, Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo 2003 *Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado* (Bogotá: CINEP).

Heyman, Josiah y Smart, Alan 1999 “States and Illegal Practices: An Overview” en Heyman, Josiah (editor) *States and Illegal Practices* (Oxford: Berg).

Madariaga, Patricia 2006 *Matan y matan y uno sigue ahí: Control paramilitar y vida cotidiana en un pueblo de Urabá* (Bogotá: Uniandes).

- Madge, Tim 2001 *Polvo blanco: Historia cultural de la cocaína* (Barcelona: Península).
- Margulis, Mario y Urresti, Marcelo 1996 *La juventud es más que una palabra* (Buenos Aires: Biblos).
- Margulis, Mario y Urresti, Marcelo 1998 “La construcción social de la condición de juventud” en *Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades* (Bogotá: Siglo del Hombre / DIUC / Universidad Central).
- Martín-Barbero, Jesús 1998 “Jóvenes: des-orden cultural y palimpsestos de identidad” en *Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades* (Bogotá: Siglo del Hombre / DIUC / Universidad Central).
- Meertens, Donny 2000 *Ensayos sobre tierra, violencia y género: hombres y mujeres en la historia rural de Colombia, 1930-1990* (Bogotá: CES / Universidad Nacional de Colombia).
- Nieuwenhuys, Olga 1996 “The Paradox of Child Labor and Anthropology” en *Annual Review of Anthropology*, Vol. 25.
- Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas OCHA, Sala de Situación Humanitaria 2007 “Infogramas Situación Humanitaria Cauca, octubre 2007” en <http://www.colombiassh.org/site/IMG/ppt/INFOGRAMAS_CAUCA_2007.ppt>
- Orsini, Giangina 2007 *Poligamia y contrabando: nociones de legalidad y legitimidad en la frontera Guajira, siglo XX* (Bogotá, CESO / Universidad de los Andes).
- Parra, Rodrigo 1991 *Ausencia de futuro* (Bogotá: Plaza y Janés).
- Paz, Juan Manuel 2001 “Estructura de la tenencia de la tierra: 1973-1997” en *Historia, geografía y cultura del Cauca: Territorios posibles*, Tomo I (Popayán: Editorial Universidad del Cauca).
- Pécaut, Daniel 1994 “¿Es posible aún una interpretación global de los fenómenos recientes de violencia en Colombia?” en *Boletín Socioeconómico* (Cali) No. 27, Junio.
- Pizarro, Eduardo 2004 *Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia* (Bogotá: Norma).
- Profamilia 2000 *Encuesta nacional de demografía y salud: Resumen región Pacífica* (Bogotá: Profamilia).
- Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal 2005 “Eventos por minas antipersonal y municiones sin explotar. Cauca, enero/octubre 2005” en <www.derechoshumanos.gov.co/PNA/documentos/cauca/minasoct26.pdf>

Quintero, Hernán 2001 “De la ilegalidad de los narcóticos a la ilegitimidad de la guerra” en *Cultivos ilícitos en Colombia. Memorias del foro realizado en agosto de 2000* (Bogotá: Universidad de los Andes / Compartir / UNDCP).

Ramírez, María Clemencia 2001 *Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo* (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia).

Ramírez, María Clemencia 1999 “Prólogo” en Ferro et al. *Jóvenes, coca y amapola: un estudio sobre las transformaciones socioculturales en zonas de cultivos ilícitos* (Bogotá: Universidad Javeriana).

Sabogal, Melquisedec 1998. *El negocio del cultivo de coca a escala campesina* (Bogotá: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo).

Schmidt, Mariana 2002 “Los niños y las niñas en la guerra” en *Niñez y conflicto armado en Colombia* (Bogotá: Fondo de Inversión para la Paz).

Smart, Alan 1999 “Predatory Rule and Illegal Economic Practices” en Heyman, Josiah (editor) *States and Illegal Practices* (Oxford: Berg).

Scott, James 1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven: Yale University Press).

Suhner, Stephan 2002 *Resistiendo al olvido: tendencias recientes del movimiento social y de las organizaciones campesinas en Colombia* (Bogotá: Taurus).

Tabares, Elizabeth y Rosales, Ramón 2005 *Políticas de control de oferta de coca: "la zanahoria" y "el garrote"* (Bogotá: CEDE / Universidad de los Andes).

Thoumi, Francisco 1994 *Economía política y narcotráfico* (Bogotá: Tercer Mundo).

Thoumi, Francisco 2002 “Illegal Drugs in Colombia: From Illegal Economic Boom to Social Crisis” en *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 582, July.

Tocancipá, Jairo 2001 “Región y mundos campesinos” en *Historia, geografía y cultura del Cauca: Territorios posibles*, Tomo I (Popayán: Editorial Universidad del Cauca).

Tocora, Fernando 2001 “La despenalización de los pequeños cultivadores de drogas ilícitas” en *Cultivos ilícitos en Colombia. Memorias del foro realizado en agosto de 2000* (Bogotá: Universidad de los Andes / Compartir / UNDCP).

Uribe, María Teresa 2001 *Nación, ciudadano y soberano* (Medellín: Corporación Región).

Valenzuela, José Manuel 2002 “Identidades juveniles” en *Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades* (Bogotá: Siglo del Hombre / DIUC /

Universidad Central).

Vargas, Alejo 2006 *Guerra o solución negociada. ELN: origen, evolución y procesos de paz* (Bogotá: Intermedio).

Vargas, Ricardo 2001 “Cultivos ilícitos, conflicto y proceso en de paz en Colombia” en *Cultivos ilícitos en Colombia. Memorias del foro realizado en agosto de 2000* (Bogotá: Universidad de los Andes / Compartir / UNDCP).

Vélez, Maria Alejandra 2001 “Farc-ELN: Evolución y Expansión Territorial” En *Desarrollo y Sociedad* (Bogotá) No. 47.

Vidart, Daniel 1991 *Coca, cicales y coqueros en América Latina* (Bogotá: Editorial Nueva América).